



EL DIFÍCIL CAMINO DEL CAMBIO DEMOCRÁTICO EN HAITÍ

*Gérard Pierre-Charles**

Haití vive, desde hace una década, una revolución democrática de amplia participación popular, en el marco de un proyecto nacional de modernización del Estado, de justicia social y de desarrollo económico. Tal proceso ha perturbado las tradicionales relaciones internacionales de los sectores de poder más conservadores del país, conduciendo al retorno al poder, a partir de una intervención de la ONU, del presidente Jean-Bertrand Aristide, democráticamente elegido en 1990, que fuera derrocado por un golpe de Estado... A partir de ello, se dio el resquebrajamiento del ejército. La renovación del Estado, con base en elecciones libres desde los municipios, del Parlamento hasta la Presidencia, se proyecta como un cambio profundo en el sistema político haitiano.

For the past decade Haiti has been experiencing a democratic revolution with ample popular participation, within the framework of a national project of modernization of the State, social justice and economic development. This process has disturbed the traditional international relations of the country's most conservative power sectors, and lead to the return to power, as a result of a U.N. intervention, of President Jean-Bertrand Aristide, democratically elected in 1990 and who was ousted by a coup d'Etat... Following Aristide's return, the army has split. The renewal of the State, based on free elections from the municipalities to Parliament and even the Presidency, augur a profound change in the Haitian political system.

La transición revolucionaria y democrática que vive Haití se viene realizando desde hace una década y se proyecta a nivel latinoamericano con rasgos de singularidad susceptibles de trastornar su percepción; sin embargo, tales particularidades no deben confundir respecto de la esencia y significado de este proceso. Se trata de una

*Director del Centro de Investigación y de Formación Económica y Social para el Desarrollo (CRESFED).

revolución antioligárquica, de amplia participación popular, en pro del sufragio universal, de la ciudadanía para todos y del ejercicio más amplio posible de la democracia, en el marco de un renovador proyecto nacional de modernización del Estado, de justicia social y de desarrollo económico.

Dicho proceso, en sus variantes de espacio y tiempo —el Caribe en las postrimetrías de la guerra fría—, combina diversos factores de contenido que le confieren su importancia histórica. Ciertamente es que este sello singular es inseparable de factores estructurales y culturales propios al nivel de desarrollo del país y a su retraso considerable en comparación con sus vecinos del continente. Sin embargo, esta singularidad no borra lo esencial de este proceso de inconfundible marca latinoamericana que conlleva un fenómeno de mutación histórica conocido en otros espacios y tiempos continentales.

Este contenido del movimiento sociopolítico haitiano lo vaticinamos en nuestra ponencia en el Congreso de ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología) de 1986, en Río de Janeiro, a pocas semanas del derrocamiento de Jean-Claude Duvalier.

En esa ocasión, señalamos lo relevante de la participación popular en este acontecimiento; la variedad de las demandas que expresó, desde un primer momento, el consenso que se suscitó entre la población contra el totalitarismo-duvalierista, y para una democratización efectiva. Tales componentes del proceso así como el hecho de que fueran cuestionados los líderes tradicionales y de los partidos políticos espurios, aunados al carácter antisistémico del discurso popular en ese periodo, representaron los instrumentos de forma y contenido de una emergente revolución democrática. Resultaba imprevisible, sin embargo, vislumbrar los senderos difíciles e inesperados que iban a seguir en la búsqueda perseverante de un mayor logro libertario.

Sin embargo, este secular episodio de la marcha del pueblo hacia la libertad y la justicia, continuando la secular utopía latinoamericana, no se fue por las grandes alamedas de la legalidad soñada, ni por los senderos luminosos de la lucha armada. Siguió un itinerario pedregoso y zigzagueante, lleno de falsas pistas y de arenas movedizas, poblado con viejos diablos astutos y dotado de las armas más sofisticadas; un terreno minado, con trampas imprevistas tendidas por los que tratan de convencer que “con el fin de la historia” ya no

hay camino... y que no hace falta buscar con qué empujar los proyectos de cambio. Un itinerario en que la inventiva popular tuvo que manifestarse, y donde el pueblo con las manos vacías, deshaciendo nudos y tendiendo puentes, tuvo que valerse de toda la inteligencia que hacía falta, para revertir a su favor las mismas fuerzas que, en el entorno internacional de ayer, se habían puesto al servicio de la opresión.

Hoy, en la senda de la victoria electoral del candidato presidencial de Lavalás, que asegura la continuidad en la legalidad del proyecto democrático-popular, resalta el saldo de una década de lucha, con sus retrocesos, sus derroteros imprevisibles y sus notables avances. Se evidencia la riqueza y profundidad de este movimiento pacífico de cambio social que reproduce muchos rasgos de las revoluciones antioligárquicas, de carácter democrático, nacional, popular —o populista— que se han dado en América Latina, desde principios del siglo hasta los años sesenta, generalmente de manera pacífica, pero violenta en algunos escenarios como los de México (1910-1917), Costa Rica (1948) y Bolivia (1953).

Al mismo tiempo, al iniciarse en los años ochenta, la evolución del proceso haitiano manifiesta numerosos elementos propios a la problemática de la transición, tal como se dio en el periodo posterior a los regímenes militares totalitarios en Uruguay, Argentina y Chile. Asimismo, refleja marcadas semejanzas con los recientes procesos de América Central, caracterizados por violentos conflictos sociales, mismos que tuvieron un carácter de confrontación militar y en los que sobresalió el peso de los actores internacionales (OEA, ONU, México, Francia, Canadá, Estados Unidos, España), que contribuyeron a que se recurriera a la negociación como vía de salida a estas crisis.

A todo ello se añaden algunos fenómenos de alta visibilidad en el escenario haitiano en particular, como es el peso de la participación popular que se ha mantenido vigente durante casi una década de conflictos políticos, en medio de esa profunda crisis sistémica. Tal efervescencia reinvidicativa rompió los esquemas dibujados desde fuera o desde dentro en pro de la “democracia restringida”, y que dio paso, a partir de elecciones libres, a un régimen de amplia mayoría, encabezado por un líder carismático, el sacerdote Jean Bertrand Aristide, cuyo surgimiento en el escenario no estaba programado y

que obtiene 67% de los votos en los comicios presidenciales de diciembre de 1990.

A partir de estas premisas, la instalación de un gobierno legítimo de amplia base y de notable participación popular, rompió los mecanismos de control y de exclusión política saliendo de los conocidos moldes de la “democracia restringida” o de la “democracia tutelada”. Tal proceso de democratización verdadera y de participación popular desencadenó una violenta respuesta de corte totalitario por parte del ejército, brazo armado de los sectores más conservadores de la sociedad. El régimen de fuerza resultante de este golpe duró tres años, durante los cuales pareció estancada la dinámica del cambio, sin alterar, sin embargo, el significado global de esa década de mutación histórica que experimentó la nación.

En efecto, en este periodo de nuevo orden mundial el régimen golpista cayó en contradicciones con los requisitos del mismo, en términos de respeto a las decisiones electorales y de observancia de los principios que garantizan los derechos humanos. Tales contradicciones fueron alimentadas por la legitimidad del gobierno constitucional, por el apoyo de la opinión mundial así como por la resistencia pasiva, pero tenaz, de todo un pueblo, que cobraron particular y sorpresivo efecto por la sistemática irrupción de los *balseiros* haitianos en el escenario político estadounidense.

Todos estos factores transtornaron la tradicional relación de apoyo mutuo entre las fuerzas de poder más conservadoras de Estados Unidos y el sector militar-oligárquico haitiano, el cual contaba con nexos tradicionales con el Pentágono, se negó a negociar y buscar una salida política a la crisis, aun cuando el *establishment* civil —Casa Blanca y Departamento de Estado— presionaba en favor de tales negociaciones que permitiesen conservar lo esencial del sistema y salvar a la institución militar.

En este marco, el retorno a la democracia se realiza mediante una intervención extranjera, la del ejército de Estados Unidos, en cumplimiento con la resolución 940 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El desenvolvimiento de esta operación, así como el marco multinacional en el que se dio, se asemejó a una novedosa empresa de “guerra psicológica”. En efecto, puso en marcha, a mediados de septiembre de 1994, a más de 20 mil hombres, con el armamento más sofisticado, que incluía cruceros, portaviones, aviones de combate,

helicópteros, que lograron sus objetivos estratégicos y tácticos sin que existieran víctimas o daños materiales en ninguna de las fuerzas beligerantes...

Así, esta acción contrastó con las clásicas intervenciones ocurridas en el continente desde hace un siglo contra los pueblos en lucha por su emancipación, y que tomaron la forma, en el periodo reciente, de injerencia manifiesta y de operaciones armadas encubiertas frente a la Revolución cubana, pero que se caracterizaron por cruentas acciones militares en República Dominicana, Granada y Panamá.

Es así como la acción internacional avalada por la presencia de tropas de diversos países, se situó en un sentido coincidente con el movimiento histórico de la nación haitiana en pro del Estado de derecho y del cambio social.

Asimismo, esta operación de carácter político-militar no se hizo en contra del pueblo, sino en apoyo a su voluntad expresada por la defensa renovada a su líder Jean-Bertrand Aristide y para el retorno de éste al poder. Por ello, llegó a crear una aceptación popular inusual que se expresó en las calles y muros del país, que originó en éste un ambiente propicio para el surgimiento de condiciones para una “democracia tutelada” encaminada a neutralizar los factores incontrolables de dicho proceso y desvirtuar, en el sentido avalado por el proyecto mundial neoliberal, la histórica lucha de las mayorías en busca de la plena soberanía popular y nacional.

Es preciso, a partir de esta caracterización, destacar los componentes más relevantes de este proceso para comprender su complejidad y captar toda su riqueza para la sociología y la ciencia política, así como para el estudio de las relaciones internacionales en el continente, en este periodo de posguerra fría.

Desde este enfoque histórico-global se puede también entender la trascendencia mundial del caso, mismo que resulta sin proporción con el peso específico de Haití, en términos de valor estratégico, tamaño geográfico, recursos naturales, nivel de desarrollo, e incluso, en función también de la indefinición de los “factores ideológico-políticos” que pudieron haber convertido a este país, uno de los más pobres del planeta, en uno de los principales focos de la atención mundial en el periodo 1991-1994.

La crisis sistemática

La crisis haitiana nace de las mismas condiciones de conformación de la nación y por su carácter histórico-estructural y su grado avanzado de maduración escapa a toda tentativa de recomposición del sistema. Es la crisis de la supervivencia más allá del tiempo aguantable, del arcaísmo y de lo anticuado en una sociedad situada en plena cuenca del Caribe; de las deformaciones inherentes al no-desarrollo o al desarrollo desigual; al antidesarrollo, que llega a reproducir algunos rasgos del capitalismo dependiente en medio de estructuras e instituciones obsoletas, dando lugar a una sociedad híbrida, deformada, desarticulada, con enormes contrastes que se reflejan en el plano político y cultural por desequilibrios crecientes.

En sus múltiples manifestaciones e instancias, esta crisis sistémica aparece como una acumulación y una exasperación de múltiples fracturas de diversa índole, en las cuales se destacan:

— Crisis de las estructuras económicas y sociales que han llevado al país al antidesarrollo y propician niveles de miseria extrema, así como contrastes excesivos entre una minoría de superricos y las mayorías carentes de todo.

— Crisis del Estado, que se puso en relieve con el derrocamiento de la dictadura duvalierista en 1986, después de tres décadas de terrorismo de Estado, y que fue arrastrando a todo el aparato administrativo y militar.

— Crisis de la autoridad y de la legitimidad de las instituciones, provocada por la evidente ineficiencia y degradación de las mismas y la demoledora crítica del Estado emprendida por la sociedad civil.

— Crisis de los partidos políticos, que por no lograr constituirse en verdaderas organizaciones, ni en instrumentos de renovación democrática o de las reivindicaciones sociopolíticas mayoritarias, quedaron como formaciones espurias, identificadas con el ejército y con las peores prácticas politiqueras, represivas, o golpistas repudiadas por el pueblo.

— Crisis de las relaciones internacionales de la oligarquía y de su instrumento político-militar que, al no contar con el apoyo irrestricto de Estados Unidos, como se dio en tiempos de la guerra fría, no lograron adecuarse a los requisitos de los tiempos en favor de la democracia, las elecciones libres y el respeto de los derechos humanos.

— Crisis de gobernabilidad, nacidas entre otros factores de la ruptura de los mecanismos de opresión y de control del Estado totalitario y de la acción del movimiento reivindicativo y de las organizaciones populares que hacen oír sus voces en todas las decisiones del Estado y en las instancias de la sociedad.

Todas estas expresiones de la quiebra del sistema encuentran sus raíces en una crisis histórico-estructural profunda. La misma nace del anacronismo de las estructuras agrarias y del aparato productivo, así como de la inadecuación de la estructura distributiva, de la organización social y de las mentalidades, de los imperativos del desarrollo moderno y de la inserción al capitalismo mundial. A raíz de ello se da el estancamiento del sistema, así como desequilibrios sociales insalvables que se reflejan en la excesiva concentración de la riqueza, la degradación de las condiciones de vida, la miseria extrema de las mayorías y la catástrofe ecológica.

Dentro de este cuadro, al darse el desmoronamiento del duvalierismo, después de tres décadas, se abre un espacio de libertad que permite al pueblo, víctima del sistema, lanzarse a la lucha contra el mismo, volviéndose protagonista de la historia.

En esa dinámica, la consigna de “cambiar el sistema” lanzada por los grupos de base se vuelve un elemento unificador de amplios sectores sociales; esta consigna es promovida por los grupos asociativos y la acción reivindicativa de las mayorías, que invaden las calles, las escuelas, los medios de comunicación y ganan, con las elecciones de diciembre de 1990, el espacio político-gubernamental y las avenidas del poder.

Mientras tanto, las fuerzas del *statu quo*, en particular los militares, la oligarquía importadora y especuladora, las “doce familias”, la clase política conservadora, quedan crecientemente acorralados por la acción reivindicativa de las mayorías. Asimismo, se encuentran desarmados frente al paulatino acceso de esta sociedad a las normas de derecho y, sobre todo, frente a la acción internacional en pro de la democracia y de la observancia de los derechos humanos, misma que limita su capacidad de represión e imposición y les obliga a respetar las nuevas reglas del juego.

En tales condiciones, sin el apoyo de sus aliados históricos y sin poder disponer de los medios habituales de coacción, los de arriba ya no pueden gobernar según la forma tradicional en que lo venían ha-

ciendo, realidad que añade un elemento más al cuadro de desequilibrio y ruptura.

Por su parte, los de abajo, las mayorías, recurriendo al sufragio universal, se apoderan del derecho de voto así como de los principios democráticos que defienden con determinación. Acceden al gobierno, bajo la conducción de un sacerdote de la teología de la liberación. Éste, bastante diestro en la gestión y el aprovechamiento de las contradicciones sociales y políticas, pero dotado de una excepcional capacidad de comunicación, suscita la confianza de las mayorías; mantiene movilizado al pueblo en las ciudades y en el campo, e incluso integra a este mismo proyecto democrático nacional el medio millón de emigrados en América del Norte, el Caribe y Europa. Así, el movimiento de la sociedad, a la vez de esencia popular y de corte populista, hace converger en un mismo impulso patriótico a las mayorías pobres, una fracción importante de los sectores medios, de la intelectualidad y de la mediana burguesía.

Tal experimento de gobierno de mayorías se da en un mundo que gira hacia la derecha y en donde tales fenómenos resultan poco usuales. Sin embargo su propia legitimidad electoral le asegura cierta aceptabilidad, pero poco apoyo y solidaridad internacional. El foro interno, se desarrolla en condiciones sumamente precarias, con insuficiente capacidad para organizar en forma eficiente los medios materiales y humanos indispensables para una empresa de tal envergadura. Esta situación de frágil dominio de las fuerzas populares compromete la capacidad de lograr, a partir de la legitimidad electoral, una hegemonía que garantizara la estabilidad y la eficacia del gobierno legítimo. Se dan así las premisas del golpe de Estado.

En tal contexto, el cuartelazo de septiembre de 1991 del general Cedras y sus esbirros favoreció una santa alianza con las fuerzas más retrógradas y conservadoras de la sociedad. Esta coalición anti-pueblo unió a la poderosa oligarquía financiera y comercial, a los grupos del contrabando y del narcotráfico, a los sectores duvalieristas más poderosos, a la burguesía tradicional, a la pequeña burguesía mulata, así como a una fracción de la clase media, beneficiaria de los privilegios y favores del *ancien régime*. Esta empresa de restauración totalitaria se valió de la larga experiencia de poder militar-duvalierista, con miras a sacar provecho de los efectos del terror sobre una población recientemente salida del horror de una larga dictadura.

Este proyecto retrógrado garantizaba a la “gente bien” protección en contra de los desmanes del populacho. Desemboca, por la misma ilegitimidad y la miopía histórica de sus protagonistas, en una violencia permanente que evidencia la crisis de gobernabilidad del sistema: se vuelve imposible el sostenimiento del régimen militar pese a su permanente despliegue de fuerza, al apoyo irrestricto de la oligarquía, en particular de la docena de superricos del país y de la mayoría de la “clase política”, y al respaldo “encubierto” de poderosas fuerzas externas, entre las cuales se destacan el Vaticano, el Partido Republicano de Estados Unidos y el gobierno de Joaquín Balaguer, en República Dominicana.

La incapacidad de gobernar de que hacen gala los militares, la crisis se agrava y se prolonga. La resistencia popular cobra las formas más solapadas; los sectores más diversos de la sociedad civil manifiestan su inconformidad contra la violencia institucionalizada y desde el Parlamento, tomado como rehén por los militares, algunos parlamentarios del Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD) utilizan su tribuna para fustigar el régimen de facto y reclamar el retorno a la democracia. Las organizaciones democráticas, desde la clandestinidad, y las asociaciones de derechos humanos, en particular la Asociación Justicia y Paz, la Plataforma de los Derechos Humanos, denuncian con valentía los crímenes y abusos, denuncias que rebotan a nivel universal, mostrando la cara criminal de los militares haitianos. La represión crece y con ella la inconformidad popular y aparecen los primeros brotes armados, que hacen crecer el espectro de la violencia institucionalizada o de la explosión social. Se crean así las condiciones para el ejercicio del “derecho de injerencia” de las potencias tutelares, lo que proyecta la crisis hacia una nueva dimensión.

El proceso del cambio

Como todo proceso histórico de difícil maduración, la transición democrática en Haití se viene realizando desde hace una década con un costo enorme y en medio de renovadas luchas sociales. Este movimiento de renovación gana fuerza a cada paso. Registra avances y re-

trocesos, perdiendo unas fuerzas y ganando otras. El pueblo va aprendiendo de la experiencia, expresando creatividad y dinamismo. El movimiento se extiende a toda la sociedad bajo la forma de numerosas agrupaciones locales o gremiales, comités de barrios, asociaciones de campesinos o de trabajadores; crece en profundidad en cuanto a los fenómenos de sensibilización y concientización, pero sin alcanzar el grado de institucionalidad que le podría garantizar avances más firmes.

Este proceso ha ampliado en forma extraordinaria el espacio de acción social, así como la participación política de la ciudadanía. En su difícil derrotero y en medio de las dificultades sin nombre, a través de las duras pruebas de la represión militar, del embargo y de la intervención extranjera, sigue suscitando más esperanzas que frustraciones, más apoyo popular que desilusiones.

Si bien es cierto que la misma marcha del movimiento Lavalás, parece a menudo desorientada e incoherente, sin consistencia ni programas, suscita un creciente cuestionamiento en cuanto a la capacidad de su líder para llevar a cabo las promesas y expectativas que ha levantado. Sin embargo, dicho movimiento sigue siendo una poderosa palanca hacia el cambio sistémico que involucra a las mayorías. Aun cuando su fuerza puede estar ligada, en determinada medida, a la misma adhesión del presidente Aristide, el líder carismático que sin haber fundado el movimiento social de este periodo histórico llegó a simbolizarlo, es mucho más que una expresión de espontaneidad, de impulsos carismáticos o populistas (como algunos de sus críticos lo identifican, de manera muy simplista).

De hecho, desde 1985 antes de la caída de Jean-Claude Duvalier las masas emergían en el escenario en multitudinarias manifestaciones. Su protagonismo creciente fue identificando el contenido de ese periodo: no se trataba de un simple cambio de gobierno sino más bien de un amplio movimiento social bajo cuya proyección, a mediano plazo, se transformaría el sistema político. Este movimiento se estructuró en forma original, a partir de las agrupaciones de base, de carácter reivindicativo, que nacieron a partir del derrocamiento de la dictadura, animados por asociaciones eclesiales, sindicales, socialistas... Se fundamentó en el rechazo por parte de las mayorías de todo lo que el duvalierismo representó durante tres décadas de terror, corrupción, muerte y exilio, así como de destrucción de los valores mo-

rales, degradación de la sociedad civil, de la condición humana y de la dignidad nacional.

En esa base de rechazo al totalitarismo y de búsqueda de una renovación del sistema se logró el consenso de los más amplios sectores sociales, políticos e ideológicos de vocación democrática. Estas bases de censo confirieron una renovada capacidad de impulso a este movimiento, que no lograron desvirtuar las fuerzas democrático-neoliberales que abogaban por “la democracia restringida”, de inspiración censitaria y propósitos excluyentes.

Este periodo de transición y de importantes conquistas democráticas quedó marcado por notables logros en los terrenos constitucional, institucional e internacional.

Las innovaciones constitucionales

La Constituyente de 1987 recogió este flujo de reivindicaciones que condujeron a la caída de la dictadura y a una efervescencia sociopolítica sin precedente en el país. Introdujo significativas innovaciones en el sistema, en el sentido de una liberalización profunda de las prácticas políticas, y fue más allá de la simple democracia representativa. Entre dichas innovaciones se destacan:

— La adopción de un régimen semiparlamentario que tiende a reducir el papel y las posibles distorsiones del presidencialismo, al conferir amplios poderes al Congreso y al primer ministro, cuya función de jefe de gobierno introduce un factor de equilibrio en el seno del Ejecutivo y entre éste y el Legislativo.

— La no reelección del presidente, la prohibición de todo referéndum que modifique la duración del mandato presidencial.

— La fijación de una rigurosa condicionalidad para la puesta en marcha de cualquier enmienda constitucional, lo que neutraliza cualquier intento de manipulación del Parlamento para modificar la Carta Magna.

— La descentralización administrativa y municipal concebida en una visión global que facilita la modernización de la institución estatal y dispone de la participación de la sociedad civil en la gestión pública, así como en el nombramiento de los jueces y en la formación de la Comisión Electoral Permanente.

— La obligación impuesta al Estado de promover la alfabetiza-

ción, la reforma agraria y la institucionalización del créole como idioma oficial.

— La adopción de una disposición contra la impunidad que limita la elegibilidad, por un plazo de 10 años, de los responsables de crímenes y abusos graves durante la dictadura de los Duvalier.

Así, la Constitución de 1987, votada masivamente por la población, se convierte en un instrumento fundamental de la construcción democrática. Se vuelve el marco de legitimidad del combate popular para la plena participación de las mayorías a la vida política y contra los remanentes del totalitarismo, incrustados en el aparato estatal y en las prácticas políticas. A partir de este marco de referencia constitucional, la lucha de las mayorías se orienta a rescatar, en favor de la sociedad civil los espacios de poder arbitrariamente conquistados por los militares, como herencia del duvalierismo y de los famosos *Tontons Macoutes*.

El resquebrajamiento de la institución militar

El ejército había sido una creación de la ocupación estadounidense de 1915-1934. Como en los demás países del Caribe que sufrieron las incursiones de los marines en los tiempos gloriosos del imperialismo, una "Guardia Nacional" fue montada y se convirtió al finalizar la ocupación en guardia pretoriana al servicio de sus tutores.

De ahí en adelante la institución armada se volvió la columna vertebral del sistema y desempeñó tanto su misión original como otra dictada por la oligarquía; baluarte del *statu quo* su misión consistió en combatir al movimiento democrático en los terrenos represivo, ideológico y político, y aplastar las reivindicaciones populares a favor del Estado de derecho y de las elecciones libres.

Con el derrocamiento de la dictadura de los Duvalier, además de asumir en el primer plano su papel de defensor del régimen, este ejército también se identificó con la misma institución gubernamental que pretendía controlar y asumir. Así, al tomar sucesivamente la jefatura de tres gobiernos de facto, entre 1986 y 1994, los generales Henri Namphy, Prosper Avril y Raoul Cedras involucraron en su obra de dominio a numerosos militares así como a la institución castrense, lo que evidencia la voluntad de someter a la nación bajo el mando de las metralletas.

Guiados por esta ambición, llegaron a fabricar dos gobiernos civiles: el del profesor Leslie Manigat, nombrado presidente en febrero de 1988, mediante unas elecciones caricaturescas en las que participa sólo el 6% del cuerpo electoral, y el Gobierno Provisional de Ertha Pascal Trouillot, quien fuera nombrada a tal efecto, con anterioridad, juez de la Corte Suprema de Justicia para poder llenar un interinato incierto, en el que el cuerpo armado ya se había desgastado hasta el punto de que no le quedaba otra alternativa más que buscar un semblante de legalidad.

Durante toda esta confrontación, el pueblo se valió de las armas de combate cívico: petición, denuncia, manifestaciones, huelgas generales, etc., entendido que el voto ciudadano en el marco del sufragio universal efectivo podría constituir un arma segura para lograr parte del cambio deseado. Tal convicción se hizo decisión política cuando en la primavera de 1990, la ONU decidió asesorar al gobierno para la celebración de las elecciones, respondiendo así a las demandas de ciertas fuerzas democráticas que buscaban garantías frente a los reiterados actos de violencia de los militares, contra el sufragio libre. Esta presencia de la ONU creó las condiciones para la participación masiva de la ciudadanía en el escrutinio del 16 de diciembre de 1990, lo que abrió una alternativa democrática.

En este contexto, el sufragio universal llegó a derrotar a los candidatos de la oligarquía, incluyendo a los que tenían la preferencia de Washington. Así se llegó a elegir como presidente a Jean Bertrand Aristide, un líder joven que emergía del mismo movimiento social reivindicativo.

Tal victoria no respondía a los intereses de la oligarquía, y por ende, no resultó del agrado de los militares y de sus aliados locales y extranjeros. Éstos fraguaron un complot contra la legalidad republicana, tramando el sangriento golpe de Estado del 30 de septiembre de 1991. El general Cedras impuso un régimen de fuerza, en un intento insensato por restaurar el poder militar y totalitario.

Así, al sumir a la nación en la ilegalidad durante tres años, el militarismo exasperó las contradicciones de la sociedad. Nutrió de modo particularmente sangriento una singular guerra social entre el pueblo y el ejército. El pueblo desarmado se fortaleció apoyado en toda su legitimidad electoral. Recurrió a las formas más diversas e imaginativas de la resistencia cívica para defender sus derechos y

cumplir con su voluntad de cambio; contó para ello con el apoyo militante de más de un millón de haitianos emigrados en América del Norte, así como con el respaldo de la opinión internacional que, sensibilizada por la tenacidad del pueblo haitiano, respaldó su lucha para el retorno a la democracia.

Por otra parte, estos militares, con el ejercicio ilimitado de la ilegalidad y la violencia, que lleva al gobierno de facto al aislamiento internacional, exasperaron las contradicciones en la sociedad. Crearon un verdadero ambiente de guerra contra el pueblo con un saldo de unos 5 mil muertos, 40 mil refugiados y 300 mil desplazados internos. Por ello recurrieron a poderosos sectores oligárquicos, a todas las redes de represión y de control, tejidos por el duvalierismo en tres décadas, así como a sus sólidos apoyos internacionales, en los medios más conservadores de Estados Unidos y de la República Dominicana. Se valieron incluso de los recursos del narcotráfico y de toda clase de medios técnico-militares remanentes de la guerra fría, de la doctrina de la seguridad nacional y del arsenal de la guerra de baja intensidad.

Esta poderosa coalición de las fuerzas del pasado llegó a imponerse durante tres años, pese a las condenas oficiales de la mayoría de los gobiernos del mundo. Pero la resistencia no dejó de manifestarse. Y frente a ello, la violencia extrema de estos militares tiñó de sangre a la nación toda. Se profundizó la crisis del Estado y la corrupción se generalizó. Se "gangsterizó" la institución militar resquebrajándose desde adentro con el desmoronamiento del sistema de disciplina y de mando. Así se volvió más evidente la total incapacidad de los golpistas para encontrar cualquier salida a la crisis. Tal situación llevó al total descrédito internacional a la institución militar, y creó las condiciones para la ruptura de su sistema de alianza internacional y su inevitable ocaso.

La perturbación de las alianzas internacionales de la oligarquía

A partir de la realidad de las luchas sociales en Haití y de la creciente coincidencia entre las fuerzas democráticas haitianas y de la comunidad internacional, se fue resquebrajando el sistema de alianzas entre esa cúpula oligárquico-militar y las fuerzas internacionales, que incluyen los organismos tales como el Mercado Común del Ca-

ribe (CARICOM) la OEA, ONU y la Comunidad Económica Europea (CEE) que reaccionaban con creciente rechazo al régimen de facto de Puerto Príncipe.

La prensa estadounidense, en particular, se volvió más y más crítica hacia los militares golpistas y refiriéndose al término *most repugnant elite* exteriorizaron su acentuada denuncia hacia sus actitudes superconservadoras y mentalidades anacrónicas.

En este marco, después de muchas tergiversaciones, los centros de decisión internacional imponen el aislamiento diplomático, la interrupción de la ayuda internacional y el bloqueo en el suministro de los productos petroleros. Si bien durante la administración de George Bush esta política punitiva, en general, pareció tener una cara oculta que alimentaba a través del Partido Republicano, del Pentágono y de la CIA, así como del gobierno dominicano las maniobras dilatorias de los golpistas. Tal política manifestó un giro con la llegada a la Casa Blanca del presidente Clinton. Después de algunos meses de vacilaciones y de concesiones a las políticas anteriores de apoyo solapado a los golpistas, el cambio de línea se hizo sentir, en particular después de la violación por los militares haitianos de los acuerdos de la reunión de Governors Islands, organizada por la Casa Blanca entre el presidente Aristide y el general Cedras. Fue cuando Clinton llegó a la decisión clara de ejercer el "derecho de injerencia" en apoyo a la legitimidad republicana en Haití.

Es así como se llega a una *Executive Order*, fechada el 6 de mayo de 1994 del presidente Clinton que decreta el embargo comercial, petrolero y de armas contra el gobierno de Puerto Príncipe. Tal disposición crea malestar con el gobierno de Balaguer, en la República Dominicana, ya que se le conminaba a cesar su boicot al embargo y que suspendiera las entregas de petróleo a su vecino, que desde meses antes venían enriqueciendo a importantes sectores dominantes dominicanos. Asimismo, las gestiones de Estados Unidos ante las Naciones Unidas llevaron al Consejo de Seguridad, en aplicación de las anteriores condenas al gobierno de facto de Haití, a adoptar estrictas medidas punitivas, que incluían la adhesión al embargo petrolero.

En tal gestión en favor del retorno a la democracia se destacaron además "los países amigos de Haití: Canadá, Venezuela y Francia". Frente a la soberbia negativa de los militares haitianos de negociar su salida del poder y de respetar las decisiones internacionales en

favor del retorno del presidente Aristide, la proposición estadounidense en favor de una intervención militar en Haití encontró su legitimidad.

Los principales gobiernos del mundo apoyaron tal iniciativa que recibió el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, a través de su resolución 940 a finales de julio de 1994. América Latina, en general se mostró reservada frente a esta decisión que le recordaba toda una práctica histórica. Invocando el principio de la no intervención, o dejando de expresarse en contra, algunos países se mostraron preocupados porque tal antecedente no fuera utilizado en una eventual acción contra Cuba.

En el logro de esta política de aislamiento y de repudio hacia el gobierno de Cedras, las comunidades haitianas del exterior jugaron un destacado papel. Se movilizaron en multitudinarias manifestaciones en Nueva York, Washington, Montreal y Miami, haciendo una tarea de *lobby* y de denuncias que sensibilizaron a los gobiernos y a la opinión pública.

Frente al rechazo y a las medidas punitivas de la comunidad internacional, los golpistas levantaron la clásica bandera del nacionalismo de ultraderecha. Mediante manifestaciones, discursos delirantes, propaganda en la radio y en la televisión y a través de una red de periodistas de *lobbys* y congresistas republicanos a su servicio, los militares y sus partidarios más retrógradas se vistieron de defensores de la soberanía haitiana e hicieron creer que la política internacional en contra de su régimen de fuerza estaba inspirada por motivos de carácter racista.

En ese contexto los golpistas crearon un membrete político-paramilitar integrado por militares en civil y ex militares, el Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH). A la vez portavoz del ultranacionalismo y del fascismo, e instrumento del terror más despiadado, esta agrupación que ocupaba las calles en manifestaciones llevadas a cabo por hombres armados, fue encabezada por Emmanuel Toto Constant, hijo de un ex general del ejército. Según las informaciones que se hicieron públicas posteriormente, era un agente de la CIA que hasta el periodo anterior a la intervención actuaba en Haití según el más puro estilo de la guerra fría.

Por su parte, el pueblo haitiano, en su mayoría, captó desde el primer momento del golpe, que el apoyo internacional a la causa demo-

crática era la principal garantía de la victoria de su batalla para la recuperación de la democracia; a partir de la cabal comprensión de esta inaudita situación, entendió también que la legitimidad de su causa y su determinación, podían perturbar la tradicional alianza entre las fuerzas internacionales, la oligarquía y su brazo militar. Entendió que la intervención extranjera promovida por Bill Clinton y la ONU se hacía en contra de los enemigos de su libertad, encabezados por este ejército que era identificado, desde tiempo atrás, como una fuerza de ocupación. Por lo tanto acogió a los contingentes armados de intervención como a unos aliados.

De hecho, la intervención de las fuerzas de las Naciones Unidas, integradas principalmente por militares estadounidenses, que tuvo lugar en Haití el 19 de septiembre de 1994, en su génesis, su forma, su contenido y su contexto temporal se diferencia de las intervenciones anteriores ocurridas en el continente. En efecto, desde su mismo origen se manifestaba el apoyo técnico de la ONU a la realización de elecciones libres en Haití en 1990, de la legitimidad incuestionada del mandato de Aristide, así como de los nuevos compromisos asumidos por la OEA, la ONU y la mayor parte de los gobiernos del mundo en contra de los golpes de Estado y de los regímenes totalitarios.

En este sentido es preciso subrayar que la transición posttotalitaria en Haití no correspondía a ninguno de los esquemas aplicados con éxito en América del Sur con las llamadas “democracias restringidas” o “democracias tuteladas”, ni en Europa del Este con la pancea de la “economía de mercado”. El carácter poco ortodoxo, disidente de esta transición, en particular el protagonismo popular en su conducción, así como su voluntad de ruptura con el *ancien régime*, no entraban en los moldes internacionalmente impuestos en el marco del Nuevo Orden Mundial. Por lo tanto, esta intervención, según el proyecto global del capitalismo mundial, tiende a absorber las “disfunciones” del proceso haitiano para hacer entrar al país en la lógica del sistema.

En cuanto a la forma que asumió esta acción, conviene señalar que consistió en un impresionante despliegue de fuerzas militares, de las más sofisticadas, así como con los medios publicitarios correspondientes. Resultó, en definitiva, una perfecta operación de guerra psicológica, con el impacto político máximo, planeada y ejecutada para alcanzar los resultados deseados, sin provocar ni un solo muerto,

ni destrucción material. Liberó a Haíti de los monstruos creados por el propio Frankenstein, quienes escapaban al control de su progenitor. El pueblo aplaudió a sus libertadores del momento. ¡Trago amargo! que abrió una herida en el corazón de esta nación nutrida históricamente por el sentido de su soberanía.

La refundación democrática

Este concepto que se sitúa en la dimensión histórica haitiana remite a nuestra experiencia como pueblo y como nación. Traduce un proceso de creación que viene experimentando el pueblo y la nación desde hace una década, caracterizado por fenómenos de ruptura, superación y renovación de importantes estructuras, instituciones y prácticas políticas, sociales y culturales, que modifican el paso de la historia como ocurre en los periodos de reformas o de revolución.

Ocaso de la República de las minorías

El acto de fundación del Estado-nación fue producto de una lucha larga con carácter de epopeya. La de un rebaño de esclavos, transportado desde África debido a la trata de negros, en uno de los episodios de opresión más bárbara de la historia de la humanidad y que a través del proceso productivo del capitalismo colonial se fue transformando en una comunidad con conciencia social y nacional. La independencia haitiana fue también un proceso de fundación republicana y democrática inspirada por las reivindicaciones por la libertad, la igualdad y la justicia, salidas de las entrañas del pueblo.

Estas ideas y otros principios exportados por la Revolución francesa, sirvieron de fundamentos y orientación al proyecto republicano, el cual quedó plasmado sucesivamente en la Constitución de 1801, redactada por el precursor de la independencia, el genial Toussaint Louverture y la de 1806, promulgada por Alexandre Pétion, fundador de la República.

De ahí en adelante, la adopción de los principios constitucionales llegados de Francia, inspiró la institucionalidad democrática. Sin embargo, en este proceso resultaba evidente la inadecuación o inaplicabilidad de estos lineamientos a la vivencia de esta comunidad. La realidad sociocultural de Haítí se resistía a la fuerza transfor-

madora del capitalismo mundial y del liberalismo, imponiéndose la carga del pasado colonial y esclavista, los remanentes de los modos de organización social y cultural africanos, así como la fuerza emergente de una poderosa oligarquía terrateniente y militarista negra y mulata, heredera de las propiedades y de las mentalidades de la minoría colonial blanca, cristiana y monárquica.

Durante todo el siglo XIX, la República quedó reducida a una caricatura en la cual sobresalían los rasgos del presidente —amo y señor— y las señas aún más violentas del general-caudillo-terratiente. Haití se volvió un escenario en que se daba la opresión y la marginación creciente de las mayorías campesinas, mientras que las luchas por el poder entre las fracciones rivales de las élites reducían los espacios de libertad y de legitimidad. El militarismo se impuso e hizo trizas las formalidades constitucionales. Tal realidad de arcaísmo medieval y luchas civiles, desembocó en la crisis social y política de principios del siglo XX. Era una crisis permanente que creó las condiciones favorables para que el expansionismo estadounidense se impusiera a la soberanía de la República.

La ocupación estadounidense duró de 1915 a 1934, tiempo durante el cual las fuerzas de intervención pretendieron modernizar las instituciones políticas y administrativas. La democracia representativa, como modelo de organización de la vida política afianzó el mismo sistema de exclusión y marginación, propio de la tradicional democracia formal al servicio sólo de la élite.

En este marco las fuerzas de ocupación constituyeron la “Guardia de Haití”, que dejaron a su salida el papel de “defensor del orden”. Esta institución se transformó en poder supremo de decisión. Empezó a hipertrofiarse y a experimentar toda clase de excrecencias, deformaciones y perversiones hasta colocarse encima de la ley y de la nación y convertirse en una fuerza de ocupación interna al servicio de la oligarquía y de los intereses extranjeros. Su omnipotencia, ligada al sistema de privilegios de que gozaban sus miembros lo fue transformando en un azote para la democracia. Derrocó a los gobiernos de Elie Lescot (1940-1946) y Dumarsais Estime (1946-1950); se puso bajo el mando del general Magloire en 1950, para que éste se hiciera cargo del poder, hasta que fuese desplazado seis años después por sus hermanos de armas, quienes colocaron en el poder en 1957, al doctor François Duvalier, de siniestra memoria.

Fue en parte para autoprotegerse y salvar sus ambiciones de la omnipotencia de la institución castrense y con ello sentar su régimen totalitario que Duvalier llegó a constituir el cuerpo paramilitar de los *Tontons Macoutes*. Éste se convirtió en la principal fuerza de represión de su largo reinado. Con la complicidad de los mismos militares deshizo las instituciones, los principios y las mismas prácticas de funcionamiento del Estado.

Tres décadas dura este régimen, personificado sucesivamente por los vitalicios presidentes François Duvalier y su heredero Jean-Claude. Destruyó los mismos cimientos del frágil edificio democrático. La Constitución quedó apartada, los sistemas parlamentario y judicial destrozados, la función pública sometida a las reglas del exclusivismo, del favoritismo y de la corrupción; el ejército fue “ton-tonmacoutizado”, las mismas mentalidades de la población perturbadas por el terror y la resignación. Fueron resuscitadas las prácticas y deformaciones más arbitrarias del militarismo y del despotismo haitiano del siglo XIX. También el régimen hizo suyas las novedosas aportaciones del militarismo moderno influido por los principios del anticomunismo, de la doctrina de la seguridad nacional y de la guerra de baja intensidad. A todo ello se añadieron los efectos particularmente perversos y eficaces, de un superpoder actuando con las armas más sofisticadas, en un país plagado de carencias, aislado entonces del mundo. El reino del terror se impuso hasta en los más mínimos detalles de la vida cotidiana, que quedaron subordinados a los caprichos de un dictador enfermizo, el increíble doctor François Duvalier. El resultado de ello fue un sistema monstruoso, devorador del hombre y del ciudadano.

Al ser derrocado el joven dictador Jean-Claude Duvalier, en 1986, por un sector del ejército, perduró el viejo sistema a través del mismo ejército, cuyos integrantes, en todos los niveles, estaban infestados por las secuelas del fascismo, al igual que toda una generación de funcionarios e intelectuales, burgueses y pequeñoburgueses y aun numerosos elementos del sector popular, creados, condicionados y moldeados por el totalitarismo.

De ahí el carácter sumamente difícil de la transición en que intervinieron todos los remanentes civiles y militares del pasado para recuperar, frenar y desvirtuar el proceso. La lucha del pueblo desarticuló a numerosos de estos herederos del duvalierismo y culminó en

1990 con la elección de Jean Bertrand Aristide como presidente. Con ello pareció llegarse a la institucionalización del gobierno legítimo y dar inicio la construcción del Estado de Derecho.

El golpe de Estado militar de septiembre 1991, recurriendo a las formas más sanguinarias de la imposición, quiso regresar al régimen totalitario en provecho de las minorías tradicionales. Una vez más el pueblo fue apartado del escenario y se impuso la ley de la fuerza. Los cuerpos fascistas de los *attaches* y del FRAPH tomaron el control de la calle, el terror. Hasta que por la acción conjugada del pueblo, en resistencia permanente, y de la comunidad internacional se puso fin a esta empresa de corte totalitario y se regresó al reino de la legitimidad.

Reformas de base al sistema político

Al término de este largo proceso de repudio al totalitarismo y de recuperación de la legitimidad republicana, el retorno al orden constitucional, con la llegada el 15 de octubre de 1994 del presidente Aristide, marca una etapa de institucionalización democrática. Se inicia una etapa de reforzamiento y de ampliación de los logros de esta transición con connotadas rupturas e innovaciones en el sistema político y en la dinámica social que dan a este periodo las características de un proceso de refundación democrática. En efecto, se producen diversos fenómenos de trascendencia tales como:

1) *Conquista de la ciudadanía y participación popular*: La participación cívica es, sin duda alguna, el espacio de conquista más relevante del pueblo actor que se sensibilizó en cuanto a la cuestión política y social. Al salir de la marginación política se organizó en incontables agrupaciones para hacer acta de soberanía, y para ser protagonista de manifestaciones y reivindicaciones a la vez locales y nacionales. Participó en las elecciones para escoger a sus representantes en opciones conscientes, y con una visión de la democracia adaptada a sus demandas concretas. Supo defender su opción electoral, denunciar las arbitrariedades y las injusticias propias al régimen militar y resistir a los impostores hasta el retorno al orden democrático; en esta experiencia se fue ampliando en el país el sentido pleno del papel de la comunidad y de cada ciudadano en la construcción de una sociedad más justa.

2) *La aplicación de la Constitución de 1987*: La Carta Magna, redactada por una Constituyente votada por el pueblo en forma entusiasta a los pocos meses del derrocamiento de la dictadura, es una expresión del proyecto democrático. Su puesta en ejecución atrasada por la encontrada oposición a la misma de los militares, sólo empezó a darse cabalmente con el gobierno legítimo, en un primer momento durante los siete meses del mandato de Aristide, pero sobre todo con el retorno al poder del presidente en octubre de 1995. Sus implicaciones para la gestión democrática de la vida pública resultan de primera importancia, en particular, la implantación definitiva del Estado de derecho, la transformación democrática de las fuerzas de seguridad, la descentralización y la autonomía municipal, que abren perspectivas sin precedentes a la participación de la población en la gestión del Estado. Tales disposiciones cobran un particular significado debido a que las recientes elecciones municipales confieren un centenar de los 132 municipios al sector Lavalás, que orienta desde los mismos a la construcción de la democracia y la conducción de la política económica.

3) *El desmantelamiento del ejército*: Su desmantelamiento en el curso del año 1995 constituye, sin duda alguna, una medida esencial para la transformación democrática del Estado. Empezó con la intervención de las fuerzas extranjeras que representó un golpe a la vez militar y psicológico contra las fuerzas armadas. El pueblo consciente de ello, el mismo día empezó a ocupar y destruir numerosos puestos militares en todo el país, y obligaron a los militares a rendirse, dispersarse, y algunos a replegarse en Santo Domingo.

El ejército no pudo ser salvado, pese a las proposiciones de ciertos sectores de la comunidad internacional, en particular del Pentágono, que abogaban por una fuerza reducida de unos 3 mil 500 hombres. Al término de tres meses de su retorno, el presidente Aristide mediante decretos y decisiones administrativas de remoción, despidos, transferencias, jubilaciones y otras medidas había mandado a casa a la mayoría de los 7 mil 500 miembros de esa institución, incluso a los jefes y cuadros intermedios. Sólo quedó activo un contingente seleccionado de unos 500 ex militares, exentos de cualquier acusación de arbitrariedades en su contra, los cuales fueron integrados a una policía interina de mil 500 hombres (de los cuales un millar no procedía del ejército), que habrá de ser disuelto tan pronto como termine el entrenamiento de la nueva policía nacional.

Así pasó a la historia este, hasta entonces, omnipotente ejército, nacido de la intervención estadounidense de 1915 como “guardian del orden” a la vez que fuerza de ocupación e instrumento de la oligarquía, cómplice y heredero del duvalierismo, que llegó a convertirse en factor gobernante, *de jure* o *de facto*, según los vaivenes de la transición posduvalierista, alinéandose tras los generales golpistas, contra el pueblo y contra la historia.

A partir de este desmembramiento, así como de las medidas legales que deberán confirmar su ocaso, privándole de presupuesto y de las demás provisiones para su funcionamiento, una disposición constitucional deberá ser adoptada para consagrar su desaparición definitiva, haciendo de Haití, después de Costa Rica (1948) y de Panamá (1993) el tercer país del continente en liberarse de sus fuerzas armadas.

4) *La formación de la nueva policía*: Paralelamente a la desaparición del ejército se fue integrando una policía nacional dependiente del Ministerio de Justicia, medida inspirada en las disposiciones de la Constitución de 1987 en favor de la separación del ejército y la policía.

Esta disposición se desprendió de la evolución de las fuerzas armadas posterior a 1986, que se convirtió en un inconfundible instrumento político del neodualismo, por lo que tal separación se volvió una reivindicación compartida por amplios sectores de la población. Resultó evidente, al ocurrir el golpe de Estado, que debería desaparecer el binomio policía-ejército, confundido en una misma función de opresión y con las peores prácticas de gangsterismo.

La nueva policía tiene una vocación democrática. Sus integrantes empezaron a ser reclutados a principios de 1995 bajo convocatoria del Ministerio de Justicia, y en el transcurso del año sus efectivos alcanzaron unos 5 mil elementos. Proviene, por lo general, de sectores populares y de capas bajas de las clases medias, escogidos según criterios de mérito, con nivel mínimo de bachillerato, que son formados, según planes de cuatro meses del Institute of Criminal Investigation Training American Policy (ICITAP), por entrenadores de Estados Unidos, Francia y Canadá.

Por haber crecido en el ambiente de esta larga transición y por estar capacitados en el plano profesional, según criterios democráticos, es de esperarse que integrarán una fuerza moderna al servicio de la democracia. Sin embargo, pese a la confianza que por lo general suscitan

los miembros de esa policía entre la población, las condiciones de su formación generan fundados temores en cuanto a lo que puede ser su vocación nacional o sus comportamientos heredados del pasado, lo que señala como una de las tareas imprescindibles de la refundación democrática, la sistemática educación patriótica de los integrantes de esta fuerza policíaca y su conversión a los valores del desarrollo nacional.

5) *La reconstrucción del cuerpo judicial*: Al ser esta institución particularmente corroída en su estructura, su funcionamiento y su misma esencia durante tres décadas, en ningún momento del proceso de transición pudo responder a sus responsabilidades constitucionales ni a las demandas de las mayorías en favor de la justicia y contra la impunidad y, mucho menos, a las exigencias de la nación en favor del Estado de derecho.

—De ahí el descrédito del aparato judicial y de los mismos abogados que quedaron identificados con la corrupción. Por ello la tendencia se extendió entre la población a recurrir a la justicia popular para castigar a los criminales políticos. Tal regla cobró aún mayor fuerza con el golpe de estado, dada la impotencia del pueblo de aplicar la justicia contra sus verdugos.

Por lo anterior, se imponía una reforma profunda del sistema judicial, misma que empezó con la formación de una Academia de Magistratura y la aplicación de los dispositivos administrativos para la renovación del personal judicial, que incluye a los jueces cuyos mecanismos de nombramiento quedaron fijados constitucionalmente. Tal reforma, proyectada hacia el futuro, implica la remoción de la mayor parte de los funcionarios, la modificación de las prácticas judiciales y la reforma de la legislación. Implica también en el corto plazo que el sistema sea depurado de los elementos venenosos e incompetentes que han desacreditado a la justicia haitiana.

6) *Autonomía y participación municipal*: Dentro del proceso de refundación democrática le toca a las municipalidades desempeñar un papel de primer orden para hacer efectiva la descentralización y la desconcentración. Es así como se puede contribuir a la renovación de la provincia y la satisfacción de las demandas de la población, en cuanto a su participación en la gestión del Estado y a la promoción del desarrollo social y económico.

En esta etapa de la transición, que fueron las elecciones municipales, el sector democrático y popular reunido bajo la bandera Lava-

lás resultó mayoritario. Este acceso del pueblo al poder comunal coadyuvará a romper el viejo molde centralizador, de carácter burocrático y parasitario, en favor de la "República" de Puerto Príncipe, mismo que además de constituir uno de los cimientos del totalitarismo ha favorecido la canalización de la mayor parte de los recursos de la nación en detrimento de la provincia.

La autonomía comunal, como marco de desenvolvimiento participativo, proporciona a la acción comunitaria, cooperativa y asociativa de las regiones, un cuadro propicio a la realización de programas de desarrollo económico o bien de carácter social, en los campos de la salud y de la higiene pública, la alfabetización y la educación, la reforestación, la vivienda, la cultura, los deportes, etc. Asimismo ofrece un entorno apropiado para un uso más eficaz y racional de los recursos del país y de los de la cooperación descentralizada y no gubernamental proveniente del extranjero. Proporciona así los pequeños motores locales, a escala de CASECS o de comunas, para el impulso de la democracia y del desarrollo, y sirve de base y asiento a otras iniciativas de carácter regional o nacional, impulsado por el gobierno central o el capital privado.

Un parlamento para la democracia

El Parlamento renovado en el año de 1995, en unas elecciones realizadas bajo la supervisión y la asistencia técnica de las Naciones Unidas, quedó formado de modo ampliamente mayoritario por los sectores democrático-populares, integrados al movimiento Lavalás. Entre estos representantes figuran cuadros políticos jóvenes, con un promedio de edad de menos de 30 años, procedentes de las organizaciones y del movimiento religioso de base, de los animadores sociales, de círculos profesionales, que por lo general han surgido a la lucha social en esta última década. Así, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, igual que entre los municipios, quedan relegados a una representación ínfima los sectores tradicionales de la oligarquía terrateniente y comerciante y aquellos identificados con el duvalierismo y el militarismo.

Tal modificación en la composición del Parlamento representa un cambio significativo e histórico en la relación de poder en el seno

del gobierno haitiano, en donde desde siempre la oligarquía ha dominado, pasándose los notables a nivel regional, las diputaciones y las senadurías de padre a hijo, en función de su capacidad de clientelismo o de sus vínculos con el gobierno central o el poder militar.

Los demás sectores políticos, no afines a la corriente Lavalás y a la vocación democrática como los partidos socialdemócratas Konakom y Panpra, así como el Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD), fijándose de modo excesivo en las facetas populistas y carismáticas del presidente Aristide, no supieron entender la amplitud y profundidad del movimiento popular que, más allá del fenómeno Aristide, dirige el movimiento Lavalás. Tampoco entendieron su nivel de conciencia y capacidad de organización. Al adoptar, entre los tres, actitudes ambiguas frente al golpe de Estado y el gobierno militar perdieron parte de su credibilidad. Además no supieron, como lo hiciera la Organización Política Lavalás (OPL), montar una estructura organizada a nivel nacional, por lo que abordaron el periodo electoral, impresionados por la política de coalición de Lavalás, inquietos por lo que percibían como los peligros del oficialismo, vendidos de antemano sin hacer verdadera campaña, y divididos sin buscar alianzas entre ellos. Más bien, frente a los resultados previsibles, y a los de la primera vuelta, llamaron al boicot del proceso electoral, cuando éste pese a las fallas técnicas y las irregularidades que registró, fue avalado por más de dos millones de electores (las dos terceras parte del cuerpo electoral) y reconocido como legítimo por la comunidad internacional y la gran mayoría de los observadores que estuvieron presentes en Haití en esa ocasión.

La presencia mayoritaria de los candidatos Lavalás en el Parlamento asegura de hecho la continuidad en el gobierno de esta coalición y la proyecta hacia el futuro. A esto se añade la victoria en las elecciones presidenciales de René Preval, ex primer ministro del presidente Aristide, conocido por su proximidad a éste y su identificación al movimiento Lavalás.

La victoria de Preval asegura la prolongación en los próximos cinco años de la experiencia gubernamental iniciada en 1990 por el triunfo de Jean Bertrand Aristide, el primer mandatario elegido democráticamente en Haití, y ofrece una posibilidad más para que se cumpla el proyecto de renovación del Estado y de modernización del sistema que significó su gobierno. En el balance de sus realiza-

ciones ofrece como hecho relevante algunas medidas muy profundas del proceso democrático, durante los dos periodos de su ejercicio real de gobierno, correspondientes a los siete meses previos al golpe de Estado y los 15 sucesivos al retorno de exilio. Y dentro de ésta un lugar de proyección histórica merece el desmantelamiento del ejército, mismo que da todo su sentido a la misma administración de Aristide, que quedó dramáticamente truncada por los 32 meses de interrupción y de desastre que significó el desgobierno de los militares con su cortejo del exilio, represión, embargo y la propia intervención extranjera. Pero el retorno del presidente, en sí, constituyó, en definitiva una victoria de la legitimidad de la causa, de la resistencia del pueblo y de la batalla diplomática llevada a cabo con admirable tesón por el presidente Aristide.

Este retorno, pese a que se realizara en el marco de una intervención extranjera, contribuyó a crear las condiciones para que la resistencia del pueblo se transformara en un nuevo impulso histórico. Este impulso de la acción de las mayorías en favor del cambio robusteció la lucha del pueblo para reconquistar el espacio democrático, resucitar o reestructurar las agrupaciones de la sociedad civil, reforzar la OPL, que se había constituido, en las duras condiciones creadas por el régimen militar, en el principal instrumento organizado de la lucha política en el país.

Estas condiciones y el provecho racional que el pueblo hiciera de ellas garantizaron la participación de las mayorías en las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 1995. La acción y presencia organizativa de la OPL, la acertada unidad en una coalición "bo tab la" (alrededor de la mesa) de los diversos ramales del amplio movimiento Lavalás, así como el apoyo del presidente Aristide a los candidatos de esta coalición aseguraron su victoria, que se convirtió en la fuerza mayoritaria del Congreso y de las municipalidades. Y en el centro de esta coalición la Organización Política Lavalás ha emergido como el partido mayoritario del parlamento.

Un gobierno para el desarrollo económico y social

Esta evolución del proceso haitiano y el panorama de las fuerzas políticas en la presente fase subrayan lo difícil del mismo, que ha que-

dado marcado, pese a su carácter global pacífico, por un saldo impresionante de víctimas. En términos económicos y sociales fue catastrófico: las inversiones se paralizaron, huida de capitales y de recursos humanos especializados, quiebra de muchas instituciones, aumento de la miseria de las mayorías, al mismo tiempo que el apetito de unos cuantos ha reducido al mínimo la capacidad del Estado de intervenir en la economía y la sociedad, lo que ha acelerado su propia crisis. La obsesión política de la sociedad en su lucha de una década en favor de la democracia, postergó el interés efectivo por los valores y demandas económicas, acumulando los sueños y reivindicaciones de los mismos hacia el futuro.

De hecho, al término de un difícil cambio democrático, la nación demanda cambios y mejorías económicas y sociales concretas. Estas exigencias constituyen el principal desafío del momento, una exigencia histórica sin la satisfacción de la cual todo lo demás puede quedar incierto y amenazado. Comenzar el arranque económico para esta era de cambio es condición *sine qua non* para asegurar la continuidad del proceso de institucionalización y culminar una década de turbulencia marcada por la irrupción de las mayorías en el escenario político. Pero si la transición política resultó difícil y azarosa, mayores dificultades se esperan en lo que debe ser la transformación económica y social de este país, para hacer pasar a las mayorías de la miseria abyecta siquiera a la pobreza digna. Un desafío que requiere visión, pragmatismo y un gran esfuerzo colectivo.

En la medida en que en los próximos meses se logre asegurar la estabilidad política y la gobernabilidad, promover el repunte económico y lograr la salida del país de la fuerza multinacional de la ONU, se podrá proyectar un futuro mejor para la construcción de la nación, siempre y cuando estos impresionantes avances políticos vayan acompañados de un desarrollo económico sensible, sostenido en la justicia social. Pero desde ahora se vislumbra el significado histórico, de trascendental importancia para la nación haitiana, de ese proceso así como el balance de la experiencia gubernamental de Jean Bertrand Aristide, mismos que se integran en el histórico combate del pueblo haitiano por la democracia y una vida mejor.

Puerto Príncipe, febrero de 1996